

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala? Experiencias de políticas públicas para la territorialización agroecológica en América Latina

Omar Felipe Giraldo y Nils McCune¹

Resumen

En este artículo utilizamos un marco de soberanía alimentaria para analizar el papel del Estado en el fomento del escalamiento agroecológico, particularmente en Cuba y en los países latinoamericanos que eligieron gobiernos de izquierda en los primeros años del siglo XXI y que actualmente enfrentan un surgimiento de fuerzas políticas de derecha. Al igual que con la participación de los movimientos sociales en las estructuras de gobernanza internacional, a nivel nacional, los movimientos sociales se enfrentan a riesgos cuando se dejan absorber en colaboraciones con el Estado para construir políticas públicas para llevar la agroecología a escala. Al participar en la institucionalización de la agroecología, los movimientos pasan a formar parte de las reglas del juego establecidas, teniendo que moverse dentro de los límites definidos por un sistema que existe para preservar los intereses de la clase dominante. Por otra parte, al boicotear el ámbito de la gobernanza, los movimientos agroecológicos permiten que las elites políticas y económicas resurgentes se apropien de tierras, territorios y recursos necesarios para que los sistemas alimentarios agroecológicos se conviertan en un sustituto mundial de la agricultura industrial. En el centro de la cuestión está el carácter político de la agroecología: ¿seguiremos apostando por la reforma, en tiempos de (contra)revolución?

¹ Traducción al español de: Giraldo, O.F. & McCune, N. (2019) "Can the State take agroecology to scale? Public policy experiences in agroecological territorialization from Latin America. *Journal Agroecology and Sustainable Food Systems*.

Introducción

El rápido ascenso de la derecha en la política brasileña es emblemático de un fenómeno regional: ninguna de las reformas institucionales de los gobiernos de centroizquierda latinoamericanos desde 1999, ni las organizaciones sociales y las poblaciones que se benefician de estas políticas, están a salvo de los ataques revisionistas, neoconservadores y protofascistas. Esta situación histórica particularmente preocupante se está desarrollando a pesar de que algunos de los esfuerzos internacionales más importantes para institucionalizar la agroecología y los derechos de los campesinos están dando sus frutos. En abril de 2018 se celebró el segundo simposio internacional de la FAO titulado “Ampliación de la agroecología para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible”, y se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales por la Asamblea General como ley internacional en el mismo año (Gliessman, 2018; LVC (La Vía Campesina), 2018). Estas tendencias contradictorias nos invitan a discutir qué estrategias deben utilizarse para ampliar y acelerar las transiciones hacia sistemas alimentarios agroecológicos.

Este artículo contribuye a la documentación y análisis de cómo las políticas públicas pueden ayudar a llevar la agroecología a escala, a la vez que califica este debate al reconocer la evolución del pensamiento sobre el poder estatal en América Latina y la política de los movimientos populares del campo que aspiran a construir la soberanía alimentaria. Nuestra historia comienza con el fin de la historia, es decir, los años 90. A partir del cenit del neoliberalismo triunfalista, una serie volcánica de desafíos al capitalismo transnacional y a la hegemonía de E.E.U.U. estalló, especialmente en toda América Latina. Estos proyectos políticos progresistas a menudo han encontrado su fuente principal de fortaleza en los movimientos campesinos e indígenas que rechazaron los proyectos de privatización y en cambio elaboraron visiones para un Estado revitalizado y democratizado. Los movimientos populares han sido la clave para movilizar el apoyo a campañas electorales exitosas, y los

gobiernos, que declaran la descolonización de las instituciones, el control nacional sobre los recursos clave y la soberanía alimentaria como prioridades del Estado (McKay, Nehring y Walsh-Dilley 2014). Varios de estos gobiernos han intentado, en diferentes grados, institucionalizar la agroecología y en algunos casos, los derechos de la naturaleza se han consagrado en la ley (McCune 2017; Sabourin et al. 2017).

Sin embargo, desde 2009, el fenómeno de los “regímenes progresistas” en América Latina ha mostrado una vulnerabilidad creciente. Argumentamos que esto se debe a tres factores principales: (1) el *impasse* que han mostrado con respecto a la transición de modelos económicos extractivos a modelos económicos regenerativos; (2) una vinculada incapacidad de las fuerzas de izquierda para movilizar permanentemente a la sociedad en una democratización de abajo hacia arriba, que incluya estructuras culturales, económicas y sociales; y (3) la aplicación exitosa en América Latina de las estrategias de Estados Unidos conocidas como guerras híbridas de cuarta generación, golpes blandos o revoluciones de color para controlar o deshacerse de gobiernos no deseados y restaurar regímenes neoliberales convencionales o lograr victorias políticas “*outsider*” de extrema derecha, los cuales suelen reprimir intensamente a los migrantes, a las minorías religiosas y sexuales, así como a los defensores de la tierra y el territorio.

Estos factores, en conjunto, delimitan el aparente “fin del ciclo progresista” y ponen en tela de juicio la estrategia de las reformas institucionales para llevar la agroecología a escala. A esto debe sumarse el hecho de que los movimientos populares casi siempre entran en negociaciones con el Estado desde una posición de debilidad, particularmente en la medida en que representan a comunidades organizadas que participan en complejas estrategias de reproducción y resistencia cotidiana, en lugar de un proyecto de clase unificada que busca la hegemonía (Veltmeyer 2018). Estas negociaciones asimétricas a menudo se justifican en aras de establecer marcos basados en los derechos dentro de los regímenes políticos existentes, con el fin de obtener algunos logros para los fines de sus disputas territoriales y de recursos (IPC (Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria) 2018). El contexto actual, sin embargo, en el que los cambios de régimen contra

los gobiernos progresistas se han convertido en el orden del día (Bello 2017), plantea una nueva pregunta para los movimientos agroecológicos: ¿qué se espera ganar a través de la negociación con gobiernos que probablemente serán reemplazados por regímenes neoliberales o profascistas agresivos?

Este artículo aborda la cuestión del Estado, desde la perspectiva de la búsqueda de métodos políticos y sociales para llevar la agroecología a escala (Mier y Terán et al. 2018; Nicholls y Altieri 2018; Parmentier 2014). Situaremos nuestra discusión en el creciente reconocimiento institucional de la agroecología como una herramienta clave para resolver los problemas que enfrenta el planeta, así como la evolución del pensamiento de los movimientos populares con respecto al poder del Estado. Nuestro propósito es analizar cómo, por qué y bajo qué circunstancias los movimientos agroecológicos deben comprometerse con el Estado en el diseño o la implementación de políticas públicas. Al mismo tiempo, creemos que este artículo es parte de una cuestión urgente y global que, esperamos, una a la ciudad y el campo: ¿cómo defender los derechos sociales —y enfriar a la Madre Tierra (LVC 2009)— frente a una creciente política de odio?

En la primera sección, describimos el ciclo de los regímenes progresistas en los sistemas políticos latinoamericanos. Ha sido un proceso de grandes dimensiones y posibilidades, lleno de defensores eufóricos y críticos decepcionados, esfuerzos mayores de desestabilización por parte de Estados Unidos y una cantidad extraordinaria de elecciones. Los persistentes debates sobre la autenticidad de estos procesos y su lugar en un proyecto emancipatorio global han sido dejados de lado por el aplastante avance de la política de derechas en el continente (Scoones et al. 2018), en relación directa con la evolución de las estrategias políticas y militares internacionales aprovechadas por las corporaciones transnacionales y las élites tradicionales.

A continuación, definimos tres dominios entrelazados que utilizamos para analizar las políticas públicas desde el punto de vista de la agroecología: el saber, el territorio y la soberanía. En lugar de limitarse a examinar políticas individuales o partidas presupuestarias destinadas a fomentar la agricultura agroecológica, nos centramos

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala?

en estos tres principios a escala del sistema de los regímenes sociopolíticos, los cuales pueden apoyar la ampliación de los sistemas alimentarios agroecológicos (Vandermeer et al. 2018). Utilizamos estos principios superpuestos para examinar los aspectos políticos del escalamiento agroecológico en América Latina. Examinamos cómo el saber, el territorio y la soberanía han sido utilizados por el Estado y por los actores no estatales para hacer posible, incentivar o bloquear la escalada de la producción agroecológica de alimentos. Encontramos que la necesidad fundamental del cambio político para la transformación agroecológica es aquella política que interrumpa el poder de los terratenientes y evite o destruya la consolidación de los imperios de los agronegocios; en ausencia de estas estructuras de poder regresivas y depredadoras, la agroecología florece.

En la última parte, discutimos nuestra lectura del Estado y de los movimientos populares en este momento histórico del capitalismo global, liderado por el capitalismo financiero especulativo, en el que se libra una lucha enconada por obtener el control de los recursos globales. Argumentamos que el Estado no es más sino su propia contradicción, y en tal sentido su control popular y democrático es la condición, *sine quo non*, para que el pueblo organizado utilice medios legales para detener el ecocidio capitalista; pero al mismo tiempo, las negociaciones en torno al poder del Estado tienden a crear caminos permanentes para la continuidad y el retorno del poder económico ejercido como poder político. Nada puede reemplazar a los movimientos agroecológicos comprometidos, territoriales y de base como medio de la autodeterminación autónoma. Como tal, invitamos a los lectores a comprometerse en la tarea histórica de organizarse para defender la tierra, la naturaleza y el futuro.

Sección 1: la construcción y destrucción de los gobiernos “amigos” en América Latina

A la pregunta de cuál contexto político e institucional favorece el escalamiento agroecológico, son ilustrativas las transformaciones agrícolas y alimentarias que se están produciendo en Cuba desde 1991 (Machín et al. 2010). Con el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, Cuba perdió a su principal socio

comercial justo cuando el gobierno de Estados Unidos intensificó el bloqueo comercial y financiero de la isla. En el año entre la invasión de Panamá y la de Irak, el presidente estadounidense, George H.W. Bush, declaró un “nuevo orden mundial” basado en la idea que la democracia liberal occidental sería la forma final de gobernanza humana. En realidad, el nuevo orden mundial o “dominio del espectro completo” (Chomsky 2003) significaría la institucionalización completa e irreversible de la terapia de choque neoliberal experimental (Klein 2007) y de los programas de ajuste estructural que ya estaban contribuyendo a la “década perdida” en América Latina, a medida que los pagos de la deuda externa, las privatizaciones y los choques de mercado expandían enormemente los niveles de pobreza extrema a través del continente. Como ha sido ampliamente documentado, el gobierno cubano reaccionó de manera totalmente diferente a las nuevas circunstancias y la agricultura agroecológica se convirtió en una forma de resistencia y en una política nacional durante la década de 1990. La política de autosuficiencia alimentaria, basada en el conocimiento de los campesinos locales, combinada con programas tecnológicos reorientados para producir insumos biológicos, jardines urbanos descentralizados y un movimiento agroecológico de campesino a campesino, se convirtió en el orden del día (Fernández et al. 2018).

La ortodoxia de libre mercado del Consenso de Washington, rechazada tempranamente por el Caracazo en 1989, la supervivencia de Cuba y el levantamiento zapatista de 1994, se vio trastocado permanentemente por los triunfos electorales del venezolano Hugo Chávez en 1998, 1999, 2004, 2006, 2009 y 2012 (Wilpert 2007). Chávez argumentó que América Latina y el Caribe sólo había logrado una independencia parcial y formal, y que se necesitaba una “segunda independencia”, basada en parte en la redistribución de la riqueza, para descolonizar económica y culturalmente el continente (Escobar 2010). Chávez y el presidente cubano Fidel Castro formaron la Alianza Bolivariana Alternativa para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en 2004, en respuesta a la propuesta de George W. Bush de un Tratado de Libre Comercio de las Américas, conocido como ALCA. En lugar de ALCA, que hubiera abierto todas las economías de la región a la “libre” competencia, el ALBA propuso

una integración regional basada en los principios de solidaridad y relaciones complementarias. A medida que los candidatos progresistas y semiprogresistas fueron elegidos en Argentina (2003), Brasil (2003), Bolivia (2005), Honduras (2005), Nicaragua (2006), Ecuador (2006), Paraguay (2008), Uruguay (2009), El Salvador (2009) y otros países, la alianza del ALBA aumentó y por fin se quebró el aislamiento de Cuba que había durado décadas (Riggirozzi y Tussi 2012). La oposición ciudadana al neoliberalismo abrió una amplia conversación sobre el socialismo, el postliberalismo, el postcapitalismo, la autonomía y la descolonización. Surgió una resistencia de varias capas al capitalismo neoliberal en América Latina: los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay se convirtieron en ejemplos de una izquierda “responsable” que buscaba reducir la pobreza a través de un enfoque neodesarrollista que ampliaba las inversiones tanto capitalistas como sociales; las revoluciones populares en Ecuador y Bolivia utilizaron nuevas constituciones para defender el concepto indígena del Buen Vivir como antípoda del desarrollo capitalista; y la Venezuela chavista se dedicó a la construcción del “Socialismo del Siglo XXI”, haciendo un llamado a los movimientos populares urbanos y rurales, a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas a organizar un nuevo tipo de Estado (Katz 2008). Además del ALBA, las instituciones progresivas de integración regional creadas durante la era de Chávez incluyeron a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Petrocaribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Este fue un período en el que los principios agroecológicos fueron consagrados en la legislación de muchos países latinoamericanos, en particular Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y Nicaragua.

A los gobiernos progresistas de América Latina se les atribuye en general la drástica reducción de la pobreza extrema, el restablecimiento de la alfabetización, la educación y la atención de la salud como derechos y no como privilegios, y la ampliación de la concepción de ciudadano y Estado para garantizar los derechos históricamente negados de las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos y los trabajadores (Escobar 2010). Estos gobiernos ampliaron enormemente los servicios sociales y la inversión pública en infraestructura, al tiempo que redujeron o

eliminaron la dependencia de los préstamos predatorios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ninguno de estos proyectos progresistas encontró la manera de romper definitivamente con las estructuras económicas extractivas que han dominado desde la época colonial, provocando profundos debates dentro de las comunidades de izquierda y los movimientos populares (Andermann 2018; Stédile 2017; Veltmeyer 2018). A pesar de la transformación del paisaje institucional, el papel de la agroecología no ha sido consistente en el “giro a la izquierda” de América Latina. El papel del sector privado en el procesamiento, distribución y venta de alimentos no ha sido desafiado agresivamente por los gobiernos del ALBA, excepto Cuba, que representa un nivel cualitativamente distinto de compromiso con los sistemas alimentarios agroecológicos (Rosset y Benjamin 1994; Machín et al. 2010). Otros países de la “marea rosa” de América Latina desde 1999 han seguido, en general, una política de dos vías: apoyando a la agricultura sostenible de los pequeños agricultores, al menos en el plano discursivo, al mismo tiempo siendo cómplice de las incursiones transnacionales de los agronegocios y los intereses mineros en los territorios campesinos.

A lo largo de los primeros años de la década de 2000, las élites tradicionales se vieron desplazadas del poder político y enfrentadas a decisiones incómodas: exiliarse en Estados Unidos, organizar una oposición activa a los gobiernos progresistas, retirarse a actividades estrictamente del sector privado, o simplemente esperar una oportunidad. El intento golpista contra Hugo Chávez en 2002 y el paro gerencial petrolero en el mismo año, el levantamiento armado que arrancó al presidente haitiano Jean-Bernard Aristide del poder en 2004, la rebelión “Media Luna” de las élites terratenientes de ascendencia croata contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia durante 2008, el golpe militar contra el presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y el atentado contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa en 2010 son hitos en la evolución de la oposición a los gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe (Borón 2014). El éxito inicial de los gobiernos de izquierda en repulsar estas conspiraciones y revueltas lideradas por las élites, se hallaba en su apoyo comprometido por parte de sectores organizados de la sociedad, en particular las organizaciones del barrio urbano y los movimientos campesinos (Wilpert 2007). Tomando el ejemplo

de Chávez, la reacción común de estos gobiernos ante los intentos golpistas era profundizar los procesos de transformación nacional y mantener la movilización permanente de sectores sociales solidarios. Esta profundización se tradujo en medidas como la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y Ecuador, así como el compromiso de Hugo Chávez de reemplazar el “Estado burgués” por una democracia comunal y ascendente del poder popular, incluyendo un compromiso explícito con la producción agroecológica (Ciccariello-Maher 2014).

Sin embargo, todos estos gobiernos se vieron estancados por su incapacidad para erradicar la corrupción en las burocracias del Estado, y muchos observadores denunciaron la existencia de una brecha entre las aspiraciones de las democracias experimentales y las prácticas culturales y sociales arraigadas que reproducen la desigualdad (Katz 2008). La flagrante contradicción entre las constituciones políticas y las leyes que reconocían formalmente los derechos de la naturaleza, y las políticas que fomentaban el extractivismo, empujaron a los gobiernos de izquierda hacia el pantano. Muchos académicos y organizaciones no gubernamentales (ONG) progresistas criticaron el “neodesarrollismo redistributivo” de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, por fomentar las industrias extractivas, y por ser demasiado amigables con los intereses capitalistas (Gudynas 2011). Sin embargo, la mayoría de las organizaciones y movimientos sociales que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), expresión continental de La Vía Campesina en América Latina y el Caribe, han estado ligeramente más cualificadas en sus críticas a los gobiernos de izquierda y, en general, han cerrado filas con los movimientos urbanos y los candidatos progresistas durante los ciclos electorales (CLOC 2015).

Poco después de que Hugo Chávez muriera de cáncer en 2013, la economía venezolana entró en crisis cuando los precios del petróleo cayeron de \$110 por barril en junio de 2014 a \$22 por barril en enero de 2016, un período de menos de dos años. A medida que el apoyo financiero venezolano a la economía regional desaparecía, los gobiernos de izquierda se enfrentaban a la perspectiva de recortar programas sociales o de asumir déficits. En este contexto, los movimientos de protesta de la recién creada clase media florecieron en América Latina, generalmente por cuestiones de corrupción. Ya

llegado ese momento, las condiciones habían madurado para las operaciones de cambio de régimen más descaradas (Mora 2018), y el éxito de las “revoluciones de color” dirigidas por Estados Unidos en Europa Oriental y la Primavera Árabe se convirtió en el patrón para aplicaciones similares en América Latina. Las rebeliones de élite que han surgido recientemente reciben apoyo logístico y financiero de la *National Endowment for Democracy* (NED), que en sus propias publicaciones se ha jactado de construir la capacidad de los grupos de oposición para tomar el control repentino de los medios de comunicación y mantener una narrativa dominante (Waddell 2018). La novedosa colaboración de los medios de comunicación oligárquicos tradicionales y las campañas en los medios sociales transforman virtualmente el panorama político de la noche a la mañana, utilizando mensajes previamente desarrollados a través de una extensa investigación política, social, antropológica y psicológica del tipo que ha ganado notoriedad desde el escándalo de *Cambridge Analytics*. Las plataformas transnacionales de medios sociales Facebook, WhatsApp y Twitter, con dueños en Estados Unidos, desempeñan un papel fundamental para avivar los levantamientos “espontáneos” y sin líderes contra los gobiernos progresistas de la región, con la ayuda de herramientas políticas contemporáneas “post verdad” como noticias falsas, *bots* y *trolls* para construir un estado de opinión pública que pueda forzar la salida de los gobiernos progresistas. Las guarimbas extremadamente violentas en Venezuela en 2014 y 2017, el bombardeo mediático previo al juicio de Dilma Rouseff en 2016, el encarcelamiento de Lula y las elecciones de 2018, y el arrinconamiento de Nicaragua desde abril de 2018, fueron esencialmente operaciones mediáticas, guiadas por las teorías de Gene Sharp (1994) sobre el conflicto asimétrico, en las que los actores no estatales derriban regímenes políticos (Korybko 2015).

El desmantelamiento de los gobiernos progresistas señala un escalofriante retorno hacia los regímenes autoritarios y neoliberales en América Latina. Las castas tradicionales de élite de terratenientes que llegan en algunos casos, y los extremistas populistas neoliberales en otros, utilizan el poder del Estado para intensificar diversas formas de violencia contra las comunidades indígenas y campesinas,

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala?

los migrantes internos y globales, las minorías sexuales, los pueblos afrodescendientes, las mujeres y, en general, los pobres (Andermann 2018; Bähre y Gomes 2018). El “fin del ciclo progresivo” en el continente parece ser el comienzo de un período de represión, criminalización y odio intensificados. No sólo se han revocado las políticas favorables a la agroecología en estos países, sino que incluso hay casos donde éstas se han convertido en herramientas para la represión y la recopilación de información contra los movimientos.

Sección 2: por qué, cómo y cuándo de la política pública agroecológica

¿Qué hay que aprender de esta dura experiencia? ¿Los movimientos sociales desperdician energía preciosa diseñando y exigiendo políticas agroecológicas? Antes de responder a estas preguntas, examinaremos algunas de las políticas agroecológicas creadas en América Latina a través de la dinámica entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas en las últimas dos décadas.

Para empezar, hay que decir que las luchas para llevar la agroecología a escala son realmente recientes, con el movimiento campesino de Nicaragua de finales de los años ochenta y la transición de Cuba en los noventa como los hitos más importantes (Holt-Giménez 2006; Wright 2005). Aunque la agroecología haya sido defendida —con ese y otros nombres— por movimientos sociales durante los últimos cuarenta años, fue hasta hace muy poco que el creciente movimiento agroecologista logró incluir el tema en los debates públicos (Wezel et al. 2009). Vale decir que por mucho tiempo la agroecología fue excluida de las discusiones políticas en las instituciones, y que la plataforma política que dio lugar a su paulatina institucionalización, fue construida con las luchas de movimientos campesinos a lo largo del siglo xx (Rosset 2006). Aunque históricamente las luchas fueron principalmente defensivas —en contra del acaparamiento de tierras, la inundación de alimentos exportados en los mercados nacionales, la privatización del agua, la concesión minera, las patentes de semilla—, es en el contexto de los gobiernos progresistas o socialistas, donde se logró conquistar

políticas favorables a la agroecología gracias a la presión de una amplia red de actores como el campesinado organizado, pueblos indígenas, sindicatos de trabajadores rurales, ONG, académicos, así como sectores de los gobiernos y la cooperación internacional (Altieri y Toledo 2011).

Este breve repaso de las políticas agroecológicas propone tres principios rectores para cambiar las relaciones de poder a favor de la agroecología: saber, territorio y soberanía.

Saber significa la recuperación de los saberes y las tecnologías autóctonas, el intercambio y el diálogo entre las formas de conocimiento, incluidas las científicas/racionales, complejas/relacionales, constructivistas y otras. La agroecología desafía la lógica convencional y productivista de los sistemas alimentarios. Lo hace mediante la revalorización de los sistemas de conocimientos indígenas y tradicionales, que están inevitablemente ligados a lugares y relaciones sociales basadas en el territorio.

Con la categoría de *Territorio* queremos argumentar que sólo mediante el cese del acaparamiento de tierras y recursos, la defensa de los territorios indígenas y la construcción de territorios de campesinos, campesinos indígenas y trabajadores campesinos a través de una reforma agraria popular e integrada, se puede llevar a escala la agroecología. Como tal, las soluciones agroecológicas implican la transformación de las relaciones sociales asociadas a la tenencia de la tierra, lo que en la práctica significa la ruptura de las estructuras de poder de los terratenientes, que pueden adoptar formas agrarias, laborales, legales, económicas, políticas o culturales. Es por ello que la reforma agraria sigue siendo la política *por excelencia* de esta categoría, sin la cual la agroecología y la soberanía alimentaria no pueden escalarse. En las políticas territoriales también incluimos el acceso a ciertos medios como los sistemas de crédito público; los medios biológicos para las primeras etapas de la reconfiguración agroecológica; y la infraestructura rural. Interrumpir el poder terrateniente es sólo el primer paso. La política agroecológica es también aquella que impide que los imperios alimentarios se afiancen, reduciendo el control que actualmente tienen en los supermercados, el establecimiento de precios y en las negociaciones comerciales internacionales.

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala?

Finalmente elegimos la *Soberanía*. La agroecología construye la soberanía alimentaria en todos los niveles, como queda claro en la declaración de Nyéléni (Foro Internacional sobre Agroecología, 2015), al poner la producción, la distribución y el consumo de alimentos en las manos de los pueblos. Al mismo tiempo, las políticas nacionales, locales y populares son necesarias para proteger los procesos agroecológicos ante la ofensiva del capital transnacional (McKay, Nehring y Walsh-Dilley 2014). Soberanía significa que la agroecología es entendida como parte de los sistemas alimentarios soberanos, en los cuales los actores sociales son libres de definir, construir y defender su cultura alimentaria, y protegerse de actores depredadores externos —tales como bancos, compañías mineras y circuitos de agronegocios— que podrían socavar sus culturas alimentarias.

Cada uno de estos tres principios se utiliza para analizar la política progresista en torno a la agroecología que ha surgido desde 1999 en América Latina y el Caribe.

Saber

En esta categoría se incluyen políticas que han promovido o apoyado procesos de formación agroecológica, intercambio de experiencias y saberes, investigación-acción, acompañamiento técnico a familias y comunidades productoras. Sobresale la Política Nacional Brasileña de Extensión Rural (PNATER) creada en 2004, que en el periodo 2010-2014 alcanzó a contar con un presupuesto de US\$ 600 millones y beneficiar a aproximadamente 550 mil familias (Borsatto 2018). También en Brasil se destaca la creación, desde el año 2003, de más de 167 cursos de Tecnólogo y Licenciado en Agroecología, y líneas y programas de doctorado en Agroecología (Schmitt et al. 2017). En Venezuela, el Programa de Formación de Grado en Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con más de 2000 egresados que son parte de las dinámicas agroecológicas del país (Domené et al. en este número).

En este grupo de políticas incluimos las políticas de transición hacia la agroecología que apoyan con capacitación y co-producción

de conocimientos agroecológicos, especialmente para la autonomía alimentaria. Entre los casos emblemáticos están el programa Pro-Huerta en Argentina con 464.527 huertas en funcionamiento (Parrouilleau, 2017), el programa Manos a la Siembra en Venezuela, y sobretodo el Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar del Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT) en Cuba. Este programa tiene más de un millón de personas vinculadas; genera más de 300 mil empleos; cuenta con 23 subprogramas en organopónicos, huertos intensivos y cultivos semiprotegidos, patios y parcelas familiares, proyectos municipales, y fincas suburbanas; está articulado con 8 ministerios y 16 instituciones; cuenta con una red de más de 7 mil centros de abonos orgánicos; y una red de 147 fincas municipales productoras de semillas²

Cuba fue el país pionero en la región en implementar políticas públicas favorables a la agroecología como respuesta a la crisis originada por la caída del bloque socialista (Machin et al, 2013), cuando el país optó por implementar muchas ideas hasta entonces minoritarias de los científicos cubanos que recomendaban desvincular la producción agrícola de las tecnologías importadas. A lo largo de la década de 1990, Cuba masificó la agricultura urbana con pocos recursos externos, mientras la alimentación del país recayó sobre el sector campesino asociado, que nunca había perdido ciertas prácticas ancestrales, como la rotación de cultivos, el arado con buey y el uso de estiércoles y compost para mantener la fertilidad del suelo. La existencia de más de 15 institutos de investigación agroecológica que existían antes de la crisis de noventa fue crucial para la expansión de la agroecología en Cuba. Particularmente, sobresale el Fórum de Ciencia y Técnica del Consejo de Estado (Machín et al., 2013), y las universidades que actualmente hacen investigación situada en todas las provincias del país.

Territorio

Al hacer balance de la redistribución de la tierra, los logros han sido muy limitados. A pesar de que los gobiernos del Partido de

² Datos obtenidos por el INIFAT del Ministerio de Agricultura de Cuba.

los Trabajadores (PT) de Brasil, distribuyeron más de 51,2 millones de hectáreas a 721.442 familias (Sauer y Mészáros 2017), las tierras adjudicadas fueron públicas y en áreas marginales, evitando el menor impacto posible en los intereses latifundistas. La estrategia del gobierno de Evo Morales en Bolivia fue similar, pues para el año 2014, se habían distribuido 28,2 millones de hectáreas a 369.507 beneficiarios (Webber 2017). Fueron en realidad programas de legalización y titulación de tierras, que no afectaron los intereses de los terratenientes. En Venezuela, el caso es distinto, porque aunque gracias a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se logró recuperar la importante cantidad de 6,34 millones de hectáreas y distribuir 117.224 cartas agrarias, ese resultado no se tradujo en un aumento de la superficie cultivada pues coincidió con una política económica enfocada a la obtención de rentas petroleras (Purcell, 2017). En Cuba, por el contrario, la reforma agraria de 2008 y 2012, sí favoreció la masificación de la agroecología del Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Se trató de una política que entregó a campesinos 1.9 millones de hectáreas de tierras ociosas de las empresas estatales mediante la figura de “usufructuarios” (Vázquez, Marzin y González 2017).

También existieron en este conjunto de países líneas de créditos especiales a interés bajo, entre los cuales vale mencionar el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar (PRONAF) en Brasil (Schmitt et al. 2017), los créditos a usufructuarios de la reforma agraria del Banco de Crédito y Comercio en Cuba (Vázquez, Marzin, e González 2017), el crédito blando para productores del nuevo Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa de Nicaragua, los préstamos para pequeños y medianos cacaoeros del nuevo Instituto de Economía Popular y Solidaria en Ecuador (Clark, 2017), y los créditos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en Bolivia (Webber, 2017). Estos créditos aunque en algunos casos han desplazado a los prestamistas usureros que prevalecían, también han recibido la crítica que, salvo en Cuba, están dirigidos para agricultores con mayor capacidad de pago, y no promueven la agroecología, sino monocultivos del agonegocio.

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala?

Con respecto al acceso al agua vale la pena nombrar la nueva Constitución Política de Bolivia que establece el agua como bien común y el programa Un Millón de Cisternas Rurales en Brasil, para la captación y almacenamiento de agua lluvia, que ha permitido dinamizar huertos en zonas áridas (Schmitt et al. 2017). Para el acceso a las semillas es importante mencionar el Programa Nacional de los Recursos Genéticos en Cuba el cual estableció un sistema de abastecimiento de semillas para el programa de agricultura urbana, y en Venezuela la Ley de Semillas de 2016, que prohíbe los patentes, transgénicos y establece la semilla como patrimonio de los pueblos a servicio de la humanidad. En Cuba, dos programas insignia para la transición agroecológica es El Programa Nacional de Producción de Medios Biológicos —creado en 1988— y el Programa Nacional de Abonos Orgánicos y Biofertilizantes —en 1991—, mediante los cuales se descentralizó la producción de controladores biológicos de plagas —entomófagos y entomopatógenos—, mediante una red de más de 200 laboratorios al servicio del campesinado, que a su vez confluyeron con una serie de políticas del Estado que favorecieron la rápida evolución del Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino³.

Así mismo es importante mencionar los programas de infraestructura rural, como el Programa de Apoyo a la Infraestructura en los Territorios Rurales (PROINF) en Brasil, y la inversión en caminos rurales que ha existido en la mayoría de estos gobiernos, lo que ha permitido disminuir los costos de transporte, reducir el poder de los intermediarios y acercar a las familias agricultoras con la población consumidora.

Soberanía

Brasil, con la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PNAPO) en 2012, Nicaragua, con Ley de Fomento a la Pro-

³ Programa Nacional de Tracción Animal, Programa Nacional de Producción de Materia Orgánica, Programa Cultivo Popular del Arroz, Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos, Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Programa Forestal Nacional, Programa de Mejoramiento Participativo de Plantas, Programa de Fincas Forestales Integrales (Machín et al., 2013).

ducción Agroecológica en 2011, y Uruguay con el Plan Nacional para el Fomento a la Producción con bases Agroecológicas han sido los países que hasta hoy han promulgado leyes específicas y normativas para la agroecología. Sin embargo, en estos y otros países también se ha creado un marco legal favorable, como la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y la Ley Orgánica de Salud Agrícola Integral en Venezuela, la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar en Argentina, los sistemas Participativos de Garantía de la Calidad Orgánica en Brasil, así como leyes ambientales afines a la agroecología y legislación en torno al derecho a la alimentación (Freguin-Gresh 2017). También ha sido importante políticas restrictivas para el agronegocio, como la prohibición de glifosato en 12 municipios de Argentina para hacer valer el principio de la precaución con respecto a sustancias dañinas a la salud humana y la naturaleza.

Entre las experiencias locales, ninguna brilla tanto como la de Rio Grande do Sul y Belo Horizonte, donde se implementó el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) en 2003 y, posteriormente, el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). Estos dos últimas políticas tenían por objetivo comprar alimentos orgánicos/agroecológicos con precios hasta un 30% superior a los de los productos de la agronomía convencional, para escuelas públicas locales, programas de alimentación, bancos de alimentos, cocinas comunitarias, asociaciones caritativas y centros comunitarios (Schmitt et al. 2017). En Cuba, por su parte, existe facilidad de comercialización mediante precios fijos establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, y existe un seguro estatal que cubre el 50% de la prima —para viandas y granos—. Las cooperativas⁴, a la que están integradas los campesinos cubanos, venden al agrocentro estatal —el cual distribuye a otros lugares de Cuba—, aunque también cuentan con puntos de venta directa (Chan y Freyre 2010).

Nicaragua ha logrado en la última década la autosuficiencia alimentaria entre un 80 a 90%, aumentando la producción de arroz del 30% del consumo en 2006 a más del 70% en 2017 (Núñez-So-

⁴ Las figuras: Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS), creadas por el Estado, fueron fundamentales para configurar una estructura nacional articulada a la ANAP en torno a la agroecología (Machín et al., 2013).

to 2018). Sin embargo, el poder terrateniente ha permanecido potente, y cuando Venezuela —debido a su propia crisis— dejó de comprar carne de vacuno nicaragüense en marzo de 2018, la oligarquía terrateniente dirigió un esfuerzo prolongado y violento para derrocar el gobierno que, hasta ese momento, le había provisto de un lucrativo oportunidad de negocio en forma de exportaciones de carne de vacuno (Dada 2018). Nicaragua fue en 2017 el único país centroamericano con una balanza comercial positiva con los Estados Unidos (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos 2018), sin duda uno de los factores que alimentaron los esfuerzos del cambio de régimen desde fuera del país.

Los logros y avances en estas políticas ejemplares son evidentes. Sin embargo es importante destacar algunas de sus mayores dificultades y obstáculos:

1. Sólo en Cuba se puede argumentar que existe un esfuerzo por articular políticas a nivel nacional para transformar el sistema alimentario mediante la agroecología (Chan y Freyre 2010). Sin embargo, hay voces dentro del sector estatal que perciben la agroecología como una alternativa provisional mientras se restablecen las relaciones comerciales. (Altieri y Funes-Monzote 2012).
2. En los demás casos, las políticas agroecológicas han sido pequeñas islas en un mar de políticas para el agronegocio. Brasil, a pesar de los muchos problemas agroecológicos de los gobiernos de PT, al mismo tiempo se convirtió en el mayor consumidor global de agroquímicos, y el segundo en superficie cultivada con cultivos genéticamente modificados (Schmitt et al. 2017).
3. Los logros han sido muy vulnerables ante los cambios de régimen político. Por ejemplo, con el golpe de Estado del gobierno neoconservador de Temer en 2016 “se cerró el Ministerio de Desarrollo Agrario dedicado a Reforma Agraria y agricultura familiar, y se cortaron los recursos para las compras públicas y la agroecología” (Schmitt et al. 2017:387). Bolsonaro, por su parte, prometió cerrar las escuelas del MST y declarar al movimiento como “organización terrorista”, mientras que en

Argentina el gobierno de Macri desmanteló en 2018 la recién creada Secretaría de Agricultura Familiar.

4. Las políticas que fomentan los circuitos cortos se burocratizaron a tal nivel que terminaron por establecer listas de requisitos, documentos, mecanismos de control y normas de calidad totalmente desajustadas a la filosofía agroecológica y ajenas a la economía campesina (Freguin-Gresh 2017; Schmitt et al. 2017).
5. La legislación ha conjugado la agroecología con la agricultura orgánica, y por tanto se basa en la sustitución de insumos (Rosset y Altieri 1997) y no en el rediseño de parcelas y paisajes rurales, y un enfoque mercantil hacia la agroexportación.

Sección 3: agroecología y estado del Estado

Después de hacer un balance de las políticas públicas de agroecología en América Latina y el Caribe, consideramos necesario hacer una reflexión sobre la situación contemporánea del Estado y las posibilidades reales de lo que se puede hacer desde sus instituciones en nuestros días. Lo hacemos, sin embargo, no como un ejercicio en el que nos ponemos los lentes del Estado —como si estuviéramos allá arriba—, sino más bien como un análisis para orientar los esfuerzos de los movimientos agroecológicos para juzgar cuándo y en qué medida deberían esforzarse por ganar reformas institucionales para escalar la agroecología.

Durante dos décadas después del final de la Guerra Fría, a excepción de Cuba, hubo un acuerdo tácito entre las fuerzas de la izquierda y de la derecha en la política latinoamericana. El arreglo consistía en que los movimientos de izquierda honrarían la democracia burguesa —buscando el poder político a través de las elecciones y protegiendo la propiedad privada— a cambio de que no se utilizaran medios militares para exterminarlos y, permitirles presentar su plataforma a los votantes (Núñez-Soto 2018). Según Vergara-Camus y Kay (2017) cuando la izquierda obtiene el triunfo electoral, si bien incorpora activistas de los movimientos sociales a la burocracia institucional y adoptan algunas de sus ideas, no puede

transformar radicalmente las relaciones que estructuran todo el sistema. Ello ocurre porque los gobiernos progresistas en realidad no emergen como clase dominante, y en tal sentido se ven obligados a hacer acuerdos y coaliciones programáticas con fuerzas históricamente opositoras para ganar las elecciones y tener gobernabilidad, teniendo que domesticar las banderas más radicales una vez se institucionalizan las agendas en la burocracia estatal (Rosset 2018).

La experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina muestra que, aparte de Cuba y Venezuela, ninguno rompió las estructuras del poder terrateniente; por el contrario, bajo su gestión, los grandes terratenientes se reagruparon formando alianzas con el capital transnacional. Las coaliciones de izquierda y centroizquierda argumentaron que controlaban el gobierno pero no el Estado (García-Linera 2012), y como tal, la oposición de las clases burguesas, rentistas y oligárquicas a las políticas redistributivas necesitaría ser “suavizada”, al garantizarles inversión en infraestructura pública, mayores niveles estabilidad social y facilitar la expansión del capital en ciertas áreas estratégicas. En este sentido, los regímenes progresistas entregaron exactamente lo que el capitalismo necesitaba: una política más aceptable, estabilidad económica y una nueva infraestructura para la privatización futura. Se está volviendo evidente que una o dos décadas de gobierno progresista favorecen la estabilidad general del sistema capitalista.

Creemos que los movimientos populares latinoamericanos están interpretando esta situación de manera divergente. Aunque no son necesariamente antagónicos entre sí, dos posiciones emergentes sugieren estrategias a largo plazo distintas. Ambos comienzan con el reconocimiento de que los gobiernos de centro-izquierda generalmente no han logrado el cambio estructural, e incluso “hasta cierto punto, sentaron las bases para el retorno de la Derecha, al no resolver las contradicciones estructurales y políticas del país, y al facilitar el acceso extraordinario de los agronegocios y del capital financiero a las zonas rurales y a los programas de gobierno” (Pinheiro-Barbosa 2018, 1). Sin embargo, a partir de este momento, las interpretaciones difieren. ¿Es el Estado intrínsecamente regresivo y represivo, sin importar quién ejerza su poder? ¿O es que el Estado tuvo alguna vez el potencial de transformar las estructuras económicas —como en Cuba—, pero lo ha perdido en los últimos

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala?

30 años como resultado del capitalismo globalizado? ¿O es que el Estado todavía tiene el potencial de redistribuir la riqueza, defender los bienes comunes y los territorios ancestrales, e incluso descolonizar la sociedad latinoamericana mediante la transformación de la sociedad pública y redefinir las prioridades nacionales?

Estas dudas teóricas se traducen inmediatamente en correlaciones políticas: ¿Deberían los gobiernos de izquierda haber roto las relaciones con la oligarquía local, los inversionistas transnacionales y los Estados Unidos inmediatamente después de ser elegidos y en su lugar decretar la soberanía alimentaria? ¿Deberían haber tomado ventaja del momento en que tuvieron que nacionalizar activos de las corporaciones y reformar el sistema político corrupto que, en última instancia, orquestó contra ellos los golpes de Estado? ¿Deberían los movimientos sociales rurales haber evitado forjar alianzas con la clase obrera urbana para apoyar a los candidatos de izquierda, en vez de rechazar la política “posneoliberal” como una farsa? ¿La situación actual exige más autonomía, o llama a un frente popular más fuerte contra el fascismo? En resumen, la situación actual en América Latina exige una profunda reflexión sobre la estrategia y tácticas de soberanía alimentaria, pragmatismo, alianzas, reformas, y revolución.

Resumiremos brevemente lo que consideramos dos de las tendencias más importantes de los movimientos sociales rurales: una que llamamos “autonomista” y otra que llamamos “soberanista”. Aunque no sean etiquetas precisas, la perspectiva autonomista puede ser personificada por el movimiento zapatista en el sur de México, mientras que la soberanista por la tradicional posición de izquierda del MST de Brasil.

La posición autonomista refleja una concepción que rechaza poner el poder del Estado en el centro de las estrategias de los movimientos sociales para cambiar la realidad. En cambio, se centra en la libre determinación y la democratización como procesos ascendentes. Esta posición es muy crítica con los intentos de involucrar al Estado como socio en el escalamiento agroecológico. La preocupación es que la participación en la institucionalización de la agroecología podría servir a las tecnologías de los gobiernos para mantener una agricultura dual —el agronegocio en coexistencia pacífica con la agricultura campesina ahora renombrado como agroecológico—

mientras que los movimientos agroecológicos quedan subsumidos por la lógica de las normativas, programas y proyectos de una burocracia institucional acoplada a las fuerzas del mercado.

Los autonomistas ven un inmenso riesgo de ser incorporados a las reglas de juego establecidas; incluidos en el marco de poder instituido, teniéndonos que mover en un sistema cuyo fin es la preservación de los intereses de la clase dominante (Rancière, 1999; Negri, 1999). Esta posición considera que existe el riesgo de que la agroecología, en lugar de que sea un poder destituyente —capaz de hacer inoperante al sistema ante el cual se revela— se convierta en un poder constituyente —manteniendo operante formas de poder del sistema político-económico constituido— (Agamben, 2014). Los autonomistas advierten sobre la posibilidad de que el escalamiento de la agroecología, y las políticas públicas subyacentes, devengan serviles a las lógicas de acumulación de capital, haciendo que la agroecología sea fagocitada por el enemigo que se quería combatir. Esta posición considera que la mejor estrategia para reemplazar los agronegocios por la agroecología es un proceso de educación agroecológica autónoma y ampliación horizontal a través de redes.

La posición soberanista, en cambio, ve a las empresas transnacionales como el principal enemigo y exige que las personas aprendan a gobernarse a sí mismas, pero también a gobernar territorios y a ejercer la plena soberanía, con el fin de controlar el poder corporativo. Desde este punto de vista, el carácter del Estado depende de qué la clase social domine a las demás; sólo la intervención activa del Estado, en respuesta a una movilización popular permanente y masiva, es capaz de detener los acuerdos comerciales y la apropiación de recursos del capital transnacional. Cuando los movimientos paran físicamente la instalación de equipos mineros u ocupan granjas, recurren a marcos y mecanismos legales para evitar enfrentamientos violentos directos y muertes. La base de estas estrategias legales es la expectativa de que el Estado no permitirá que los poderes capitalistas cometan violaciones masivas de los derechos humanos.

En este debate hay buenas razones de ambas partes. Del lado autonomista pueden anticiparse varios riesgos con la institucionalización de agroecología. De hecho, con el retorno a los regímenes ortodoxos que transfieren el Estado de las funciones del sector

privado, existe un enorme riesgo de que la institucionalización de la agroecología termine siendo un aliado de las inversiones. En particular vale la pena mencionar el caso de las industrias extractivas. Los esquemas de pagos por compensación del daño por la acción de grandes empresas —minería, hidrocarburos, presas, eólicas—, o pago por servicios ambientales tipo REDD+, pueden terminar dirigidos hacia la financiación de proyectos agroecológicos en alianzas público-privadas. La agroecología se pone de moda (Giraldo y Rosset, 2018) en un entorno crecientemente neoliberal y neoconservador, y el boom de dinero que puede llegar como transferencia para conservación y proyectos productivos derivados de la compensación por la destrucción de ecosistemas en otros territorios no puede subestimarse. Las políticas públicas y el financiamiento para la agroecología pueden ser una oportunidad para lavar proyectos extractivistas, no sólo para tener viabilidad jurídica —las compensaciones para mitigación por cambio de uso de suelo es obligación en muchos países—, sino legitimidad al adoptar un disfraz ambiental y un rostro socialmente responsable.

La agroecología asociada a la agricultura climáticamente inteligente, es bienvenida por las corporaciones más grandes del mundo. El reciente interés de incluir la agroecología en la política pública puede explicarse parcialmente por la necesidad del agrocapitalismo de crear, o ampliar, nuevas fuentes de negocios, como la industria de insumos orgánicos industriales, los monocultivos orgánicos para nichos de exportación, lucrar con la venta de bonos de carbono, agroecoturismo, biocomercio, al mismo tiempo de restablecer las condiciones de producción (O'Connor, 1998) degradadas por las tecnologías de la revolución verde (Giraldo 2019; Giraldo y Rosset 2018).

Una advertencia más del lado autonomista es acerca de los riesgos inherentes al flujo de recursos que vendrán para financiar programas, proyectos y préstamos para la agroecología y que han sido anunciados con el programa global *Scaling Up Agroecology Initiative*⁵ de la FAO. Como se ha visto en los casos más autónomos la austeridad como principio de trabajo es virtud, y por el contrario, como

⁵ www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf

suele ocurrir en los clásicos proyectos del desarrollo, el exceso de dinero corrompe los procesos. La austeridad impide el clientelismo, el corporativismo y el apego al poder, y fomenta, en cambio, la imaginación política, estimula el florecimiento de la reciprocidad, el apoyo mutuo, y la solidaridad para construir caminos por fuera del mundo del dinero y la economía. La sencillez evita que se creen relaciones estimuladas por los salarios de los proyectos, que surjan desigualdades en el modo de vida entre quienes devengan recursos de los proyectos y el resto de los campesinos. Hemos ya sido testigos por mucho tiempo que los proyectos y programas políticos suelen ser verdaderas escuelas de consumo que crean dependencia hacia el dinero (Baschet, 2015), que desteejen las relaciones comunitarias basadas en otro tipo de valores —como la gratuidad y el placer del servicio— las cuales no pasan por la lógica del interés monetario (Timmermann y Félix 2015).

Además, incluso en los mejores casos de políticas agroecológicas, existen riesgos asociados a la creación de una población “beneficiaria”. Una buena política pública en general tiene un impacto desmovilizador, pero particularmente cuando los gobiernos que crean la política buscan desmovilizar, acomodar o cooptar a los movimientos. El propio Estado crea la imagen de que el movimiento se ha vuelto redundante en la medida en que sus instituciones ya están satisfaciendo las exigencias de la base (McKay, Nehring y Walsh-Dilley 2014). Como tal, los movimientos necesitan mostrar extrema prudencia al decidir cuándo “sacar provecho” de su movilización y consolidarlo como reformas institucionales. Si las buenas políticas desmovilizan completamente al movimiento, se hace mucho más difícil reaccionar a los vientos políticos cambiantes.

Sin embargo, también es necesario prestar atención a la posición soberanista. No participar en la institucionalización de la agroecología podría impedir que se modifique aunque sea parcialmente la razón de Estado en torno a la política agroalimentaria, apoyando de manera indirecta a que se creen aún más obstáculos para que la agroecología pueda territorializarse. Conquistar ciertos espacios es posible para facilitar algunos aspectos como se mostró en las políticas que se han logrado hasta el momento, u otras que podrían conquistarse mediante una adecuada correlación de fuerzas del movimiento agroecologista y las élites económicas que suelen dominar

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala?

el poder político. El Estado no es un agente monolítico y sin fisuras. Es justamente su propia condición de contradicción permanente, la que permite abrir brechas, rupturas, intersticios dentro del mismo sistema global de poder. Cuando existe la suficiente correlación de fuerzas derivadas de la organización social, pueden abrirse esos espacios y lograr que se efectúen algunas políticas antagónicas al proyecto de las élites dominantes (Boneti, 2006). No obstante es necesario todavía preguntarse cómo abrir esas grietas sin que los movimientos pierdan la visión de los objetivos; sin que la agenda estatal se coma al movimiento.

Conclusión: ¿Reformismo o revolución agroecológica?

En los últimos años del siglo XIX Eduard Bernstein (1993 ([1889])) abrió un agudo debate sobre el papel de la socialdemocracia en la construcción del socialismo. Su famosa tesis aseguraba que era posible cumplir los objetivos del movimiento obrero sin tener que recurrir a la revolución, apelando a reformas paulatinas en el marco de las instituciones del Estado. La estrategia, según Bernstein, consistía en hacer reformas graduales y cambios cualitativos en las relaciones capitalistas de producción a través de las instituciones políticas del régimen capitalista para anegar lentamente a los fines del socialismo (Steger 2006). Rosa Luxemburgo controversió sus ideas en su famoso trabajo titulado *Reforma o Revolución* (2006 [1900]), cuestionándolo por haber abandonado el análisis de clase y ofrecer soluciones que sólo servirían a la perpetuación del orden burgués. Este antiguo debate cobra vigencia en las discusiones del progresismo latinoamericano de inicios del siglo XXI pues la historia ha mostrado que no pueden hacerse cambios radicales —como los que requiere la transformación del sistema agroalimentario globalizado— respetando la institucionalidad y el *statu quo* vigente.

La pregunta para el movimiento agroecológico es si aspiramos a un reformismo del modelo agroalimentario, o si, por el contrario, nuestra lucha es por una revolución campesina de base agroecológica que transforme radicalmente el sistema instituido (Levidow, Pimbert y Vanloqueren 2014). Lo que hemos aprendido de los regímenes progresistas, como los que han llegado a ocupar el

gobierno en América Latina desde inicios de nuevo milenio, es que, en esencia, han tenido vedada la posibilidad de fomentar la reproducción de capital, lo cual es particularmente evidente en los temas agrarios, pues lo que ha ocurrido en la región ha sido una expansión sin antecedentes de los agronegocios⁶, acompañados por algunos cambios menores en la estructura agroalimentaria. Esto nos enseña que contra la “hidra capitalista”, no podemos seguir apuntando el machete a una de sus cabezas.

¿Cuál debe ser la perspectiva de los movimientos agroecológicos, en este momento histórico de contrarrevolución y de ascenso de la extrema derecha? Tal vez, la elección de si participar o no en las instituciones es una falsa dicotomía. Creemos que es necesario abrir una lucha en varios frentes, aunque pueda sonar contradictorio. Mientras exista el Estado es necesario disputarlo para abrir ciertas grietas. En algunos aspectos como el acceso a los medios de producción el Estado constituye un ente al que no podemos renunciar en el proceso de construcción de la hegemonía. Por eso cuando existen regímenes afines es necesario cooptarlos, permearlos, conspirar por dentro, crear sentido común, ganar espacios para las propuestas de transformación social gracias a los aliados dentro de las estructuras de poder. Pero también saberse distanciados, como entes críticos de la burocracia estatal.

Esto, en otros términos, significa repensar la estrategias descen-
trando al Estado: sacándolo del centro, marginalizándolo, lo que quiere decir que no podemos concentrarnos en el Estado, pero tampoco lo podemos ignorar. En toda América Latina, las comunidades campesinas desplazadas por tractores y guardias armados no tienen más remedio que recurrir a las instituciones. Sin protección legal o derechos en los que basar sus reclamos, las comunidades agroecológicas tienen muy pocas opciones para activar campañas en los medios de comunicación y redes de solidaridad ante su difícil situación.

⁶ El caso más dramático lo constituye “la república de la soya” en Suramérica. Se trata de una superficie que en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia creció de 17 millones a 46 millones de hectáreas entre 1990 y 2010, y en la que se deforestaron 20 millones de hectáreas del año 2000 al 2010 (WWF, 2014).

¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala?

Ignorar las políticas públicas también significa entregarlas a las corporaciones que intentan imponer su versión de agroecología como herramienta del capitalismo verde. Más bien, los movimientos agroecológicos pueden y deben desarrollar la capacidad de crear y defender sus saberes, sus territorios y su soberanía, construyendo sus propias instituciones y haciendo uso del Estado cuando y sólo cuando dicho uso fortalezca concretamente los procesos de emancipación, autonomía y autodeterminación de las bases.

De hecho, las políticas implementadas por Cuba y por los gobiernos progresistas en la región enseñan que las acciones institucionales que deben buscarse son aquellas que faciliten ciertas condiciones para que la agroecología pueda practicarse y expandirse, pero sin que esas acciones generen dependencias o eclipsen los procesos ante cambios de administraciones. En otras palabras, es aceptable que exista algún grado de heterotomía que complemente procesos sociales en curso y que abra la posibilidad a otros nuevos, sin que las acciones institucionales aplaquen el dinamismo de las acciones colectivas más autónomas. El objetivo de las políticas deseables que pueden gestarse gracias a la presión de la sociedad civil, consiste en abrir espacios y liberar ciertos recursos para que los actores organizados puedan usarlos de acuerdo a sus acuerdos colectivos y horizontes culturales. La idea es que el acompañamiento de agentes externos fomente las relaciones espontáneas entre personas, y de ese modo se distribuya el poder, se aliente el acceso a saberes y bienes comunes, y exista una transición paulatina hacia la autonomía de individuos y comunidades.

Creemos que la financiación pública para la búsqueda de algunos de esos objetivos no debe rechazarse y que, como enseñan algunos casos emblemáticos como los descritos, puede dársele la bienvenida a políticas específicas para el escalamiento de la agroecología. Hacemos referencia a los apoyos estatales para: 1) Escuelas de formación agroecológica lideradas por movimientos y organizaciones rurales —Ver artículo de Rosset et al. en este número—; 2) Procesos horizontales de intercambio tipo Campesino a Campesino —Ver artículo de Val et al. y Khadse y Rosset en este número—; 3) Mercados campesinos situados, y territoriales; 4) Programas de compras públicas de alimentos producidos de manera agroecológica; 5) Reforma

agraria 6) Apoyo para la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas locales de semillas —Ver artículo de García et al. en este número—; 7) Liberación de fondos para la investigación en agroecología; 8) Programas públicos de enseñanza básica para la agroecología —Ver artículo de Morales y Ferguson en este número— y carreras universitarias asociadas a cambios en el currículo de la agronomía y otras carreras agropecuarias (Ver artículo de Domené et al. en este número).

Todo esto es aceptable y sin duda ayuda a las transiciones agroecológicas. Sin embargo, es la *política de abajo*, la que debe concentrar la mayor parte de los esfuerzos, teniendo claro que las fisuras que pueden abrirse en el Estado, el gobierno y las instituciones, son únicamente complemento de la construcción colectiva por la autodeterminación y la autonomía de las organizaciones campesinas y populares. No podemos menospreciar la capacidad estructurante de la política que se hace desde abajo mediante la autoorganización, la autogestión, y la revitalización de las riquezas relaciones y la regeneración de los ámbitos comunitarios. En términos de Spinoza (2001) es la *potentia* (habilidad interior) y no tanto la *potestas* (poder exterior) el elemento que debe fortalecerse en las luchas antisistémicas.

Otorgar demasiado poder al Estado mediante la búsqueda de políticas públicas para la masificación de la agroecología, puede ser contraproducente si es un medio para capturar la *potentia* colectiva construida por los ensayos heterarquicos de poder que se han hecho desde abajo. Por eso creemos que las discusiones sobre el escalamiento de la agroecología deben salir del tono estadocentrista que han tomado en sus inicios. Los procesos sociales horizontales de la agroecología, y en especial Campesino a Campesino, han mostrado con mucha elocuencia que es posible reavivar las riquezas relacionales, regenerar la red de relaciones humanas, y revitalizar saberes tradicionales, movilizandolos la capacidad de las comunidades rurales y suburbanas de usar los recursos disponibles, como semillas, técnicas, herramientas y saberes. Estas experiencias son una prueba de la potencialidad que tiene rehabilitar ámbitos comunitarios, y las ventajas de las estructuras relacionales basadas en la participación masiva y la creatividad colectiva (Giraldo, 2018).

Lo anterior es sólo una manera de decir que la masificación de la agroecología es radicalmente distinta a la lógica de los proyectos, porque cambia el sentido de construcción de procesos pues se hace lentamente⁷, poco a poco, su crecimiento es rizomático y a largo plazo, muy distinto a la lógica de los periodos gubernamentales y los ciclos de financiación de proyectos. Las transiciones agroecológicas son procesos de larga duración y demandan continuidad. Esta lógica procesual, lenta, continúa y cualitativa tiene un ritmo diferente a las agendas de los gobiernos, los cuales deben regirse a indicadores y resultados cuantitativos, marcos jurídicos estrictos, contrataciones de personal profesional para labores específicas, y ciclos de financiación cortos.

El único camino que queda es el largo. Como el estratega militar Liddell Hart (1991[1954]) lo dijo: “En estrategia, el camino más largo puede ser el más corto a casa”. Sólo la práctica activa, y la constancia en los métodos de organización comunitaria, basados en métodos agroecológicos, diálogo, luchas locales y la construcción de liderazgo, pueden crear el tipo de movimientos de base sólidos que pueden cambiar el equilibrio de fuerzas. Aunque más lento de lo que nos gustaría, es la única forma posible de no apelar al reformismo, sino a la revolución.

Referencias

- Agamben, G. 2014. What is a destituent power? *Environment and Planning D: Society and Space* 32 (1):65–74. doi:10.1068/d3201tra.
- Altieri, M., and F. Funes-Monzote. 2012. The paradox of Cuban agriculture. *Monthly Review* 63 (8):23–33. doi:10.14452/MR-063-08-2012-01_3.
- Altieri, M. A., and V. M. Toledo. 2011. The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. *Journal of Peasant Studies* 38 (3):587–612. doi:10.1080/03066150.2011.582947.
- Andermann, J. 2018. Turn of the tide? Cultural critique and the new right. *Journal of Latin American Cultural Studies* 27 (1):1–3. doi:10.1080/13569325.2017.1420635.

⁷Recordamos los principios de campesino a campesino: empezar despacio y en pequeño, limitar la introducción de tecnologías, experimentar en pequeña escala.

- Bähre, E., and F. Gomes. 2018. Humiliating the Brazilian poor: The iconoclasm of former president Lula. *Anthropology Today* 34 (5):10–15. doi:10.1111/1467-8322.12459.
- Baschet, J. 2015. *Adiós al capitalismo: Autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidad de mundos*. Madrid: Ned ediciones.
- Bello, W. 2017. Counterrevolution, the countryside and the middle classes: Lessons from five countries. *Journal of Peasant Studies*. doi:10.1080/03066150.2017.1380628.
- Bernstein, E. (1993 [1889]). *Bernstein: The Preconditions of Socialism*. Cambridge University Press.
- Boneti, L. W. 2006. *Políticas públicas por dentro*. São Geraldo: Editora Unijuí.
- Borón, A. 2014. *América Latina en la geopolítica del imperialismo*. Mexico: CEIICH.
- Borsatto, R. 2018. Brazilian experience in rural extension reform: challenges of a pluralistic and participatory policy addressing family farming. Unpublished manuscript, São Carlos.
- Chan, M. L., and E. F. Freyre. 2010. *Atando Cabos. La Agricultura Cubana: Contratiempos, Reajustes y Desafíos*. Havana: Oxfam.
- Chomsky, N. 2003. Dominance and its dilemmas. *Boston Review* 28 (5). Accessed October 22, 2018. <http://bostonreview.net/archives/BR28.5/chomsky.html>.
- Ciccariello-Maher, G. 2014. Building the commune: Insurgent government, communal state. *The South Atlantic Quarterly* 113 (4):791–806. doi:10.1215/00382876-2803657.
- Clark, P. 2017. Neo-developmentalism and a “vía campesina” for rural development: Unreconciled projects in Ecuador’s citizen’s revolution. *Journal of Agrarian Change* 17 (2):348–64. doi:10.1111/joac.12203.
- CLOC. 2015. *Declaración Final del VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-La Vía Campesina*. Argentina: Buenos Aires. Accessed October 22 2018. <http://www.cloc-viacampesina.net/congresos/vi-congreso>.
- Dada, C. July 6, 2018. Los enmascarados son de los dos bandos. *El Faro*, Accessed November 8, 2018 <https://elfaro.net/es/201807/centroamerica/22202/“Los-enmascarados-son-de-losdos-bandos”.htm>
- Escobar, A. 2010. Latin America at a crossroads: Alternative modernizations, post-liberalism or post-development? *Cultural Studies* 24 (1):1–65. doi:10.1080/09502380903424208.
- FAO. 2018. *Scaling up Agroecology Initiative: Transforming food and agricultural systems in support of the SDGs (A proposal prepared for*

- the International Symposium on Agroecology, 3–5 April 2018), Accessed October 7, 2018. <http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf>.
- Fernandez, M., J. Williams, G. Figueroa, G. G. Lovelace, M. Machado, L. Vasquez, L. Perez, L. Casimiro, G. Romero, and F. Funes-Aguilar. 2018. New opportunities, new challenges: Harnessing Cuba's advances in agroecology and sustainable agriculture in the context of changing relations with the United States. *Elementa Science of Anthropocene* 6 (1):76. doi:10.1525/elementa.337.
- Freguin-Gresh, S. 2017. Agroecología y agricultura orgánica en Nicaragua. Génesis, institucionalización y desafíos. In *Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe*, ed. FAO, Red PP-AL, 174–95. Brasilia: FAO.
- García-Linera, Á. 2012. Las tensiones creativas de la revolución: La quinta fase del Proceso de Cambio. La Paz: Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Giraldo, O. F. 2019. Political ecology of agriculture. *Agroecology and post-development*. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-11824-2.
- Giraldo, O. F., and P. M. Rosset. 2018. Agroecology as a territory in dispute: Between institutionality and social movements. *The Journal of Peasant Studies* 45 (3):545–64. doi:10.1080/03066150.2017.1353496.
- Gliessman, S. 2018. Scaling-out and scaling-up agroecology. *Agroecology and Sustainable Food Systems* 42 (8):841–42. doi:10.1080/21683565.2018.1481249.
- Gudynas, E. 2011. Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. In *Más Allá del Desarrollo*, ed. M. Lang and D. Mokrani, 21–53. Quito: Ediciones Abya Yala.
- Holt-Giménez, E. 2006. *Campesino a campesino: Voices from Latin America's farmer to farmer movement for sustainable agriculture*. Oakland: Food First Books. International Forum for Agroecology. 2015. Declaration of Nyéléni. Sélingué, Mali: International Forum for Agroecology, Nyéléni Centre. IPC (International Planning Committee for Food Sovereignty). April 5 2018. Intervention by Organizations of Small-Scale Food Producers and Civil Society at the II International Symposium on Agroecology. Rome. Accessed October 22, 2018. <http://www.foodsovereignty.org/international-symposium-on-agroecology/>
- Katz, C. 2008. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Buenos

- Aires: Ediciones Luxemburg.
- Klein, N. 2007. *The shock doctrine*. New York: Metropolitan Books.
- Korybko, A. 2015. *Hybrid wars: The indirect adaptive approach to regime change*. Moscow: People's Friendship University of Russia.
- Levidow, L., M. Pimbert, and G. Vanloqueren. 2014. Agroecological research: Conforming—Or transforming the dominant agro-food regime? *Agroecology and Sustainable Food Systems* 38 (10):1127–55. doi:10.1080/21683565.2014.951459.
- Liddell Hart, B. H. 1991 [1954]. *Strategy*. London: Meridian.
- Luxemburg, R. (2006 [1900]). *Reform or revolution and other writings*. Chelmsford, MA: Courier Corporation.
- LVC (La via Campesina). 2018. UN Human Rights Council passes a resolution adopting the peasant rights declaration in Geneva. Accessed October 28, 2018. <https://viacampesina.org/en/un-human-rights-council-passes-a-resolution-adopting-the-peasant-rights-declaration-in-geneva/>
- LVC (La Vía Campesina). 2009. Small scale sustainable farmers are cooling the earth. Jakarta: Views. Accessed October 15, 2018. <https://viacampesina.net/downloads/PAPER5/EN/paper5-EN.pdf>.
- Machín Sosa, B., A. M. Roque Jaime, D. R. Ávila Lozano, and P. M. Rosset. 2013. *Agroecological revolution: The farmer-to-farmer movement of the ANAP in Cuba*. Havana and Jakarta: ANAP and La Vía Campesina.
- Machin-Sosa, B., A. M. Roque Jaime, D. R. Avila-Lozano, and P. Rosset 2010. *Revolución Agroecológica: el Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP en Cuba*. ANAP, La Habana.
- McCune, N. 2017. Family, territory, nation: Post-neoliberal agroecological scaling in Nicaragua. *Food Chain* 6 (2):92–106. doi:10.3362/2046-1887.2016.008.
- McKay, B., R. Nehring, and M. Walsh-Dilley. 2014. The 'state' of food sovereignty in Latin America: Political projects and alternative pathways in Venezuela, Ecuador and Bolivia. *Journal of Peasant Studies* 41 (6):1175–200. doi:10.1080/03066150.2014.964217.
- Mier Y Terán, M., O. F. Giraldo, M. Aldasoro, H. Morales, B. Ferguson, P. Rosset, M. Khadse, and A. Campos. 2018. Bringing agroecology to scale: Key drivers and emblematic cases. *Agroecology and Sustainable Food Systems* 42 (6):637–65. doi:10.1080/21683565.2018.1443313.
- Mora, F. September 4 2018. Don't focus on regime change in Venezuela. Washington, D.C:
- Foreign Affairs. Accessed October 22, 2018. <https://foreignpolicy.com/2018/09/04/aftermaduro-in-venezuela-regime-change/>

- Negri, A. 1999. *Insurgencies: constituent power and the modern state*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Nicholls, C. I., and M. A. Altieri. 2018. Pathways for the amplification of agroecology. *Agroecology and Sustainable Food Systems* 42 (10):1170–93. doi:10.1080/21683565.2018.1499578.
- Núñez-Soto, O. 2018. *¿Quién produce la riqueza en Nicaragua?* Managua: CIPRES.
- O'Connor, J. R. 1998. *Natural causes: Essays in ecological marxism*. New York: Guilford Press.
- Office of the US Trade Representative. 2018. Resource Center, Western Hemisphere, Nicaragua. Accessed November 3, 2018. <https://ustr.gov/countries-regions/americas/Nicaragua>
- Parmentier, S. 2014. Scaling-up agroecological approaches: What, why and how? Belgium: OxfamSolidarity. <https://www.oxfamsol.be/fr/scalingagroecologicalapproacheswhatwhyand-how>.
- Patrouilleau, M. M., L. E. Martínez, E. Cittadini, and R. Cittadini. 2017. Políticas públicas y desarrollo de la agroecología en Argentina. In *Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe*, ed. FAO, Red PP-AL, 20–43. Brasilia: FAO.
- Pinheiro-Barbosa, L. March 18–21 2018. Dilemmas of peasant social movements faced with the dichotomy between progressive governments and the rise of the new right in Latin America: The case of Brazil. Working paper at Emancipatory Rural Politics Initiative: Authoritative Populism and the Rural World, The Hague. Accessed November 8 2018, https://www.iss.nl/sites/corporate/files/201803/ERPI%20CP%2026_Barbosa.pdf.
- Purcell, T. F. 2017. The political economy of rentier capitalism and the limits to agrarian transformation in Venezuela. *Journal of Agrarian Change* 17 (2):296–312. doi:10.1111/joac.v17.2.
- Rancière, J. 1999. *Disagreement: Politics and philosophy*. Minneapolis: U of Minnesota Press.
- Riggirozzi, P., and D. Tussi. 2012. The rise of post-hegemonic regionalism in Latin America. In *The rise of post-hegemonic regionalism: The case of Latin America*, ed. P. Riggirozzi and D. Tussi, 1–16. London: Springer.
- Rosset, P. 2006. Moving forward: Agrarian reform as a part of food sovereignty. In *Promised land: competing visions of agrarian reform*, ed. P. Rosset, R. Patel, and M. Courville, 301–321. Oakland: Food First Books.
- Rosset, P. 2018 August 19. América Latina y la conciliación de clases. Mexico: La Jornada, Opinión.

- Rosset, P. M., and M. Benjamin. 1994. *The greening of the revolution*. Fort Lauderdale: Ocean Press.
- Rosset, P. M., and M. A. Altieri. 1997. Agroecology versus input substitution: A fundamental contradiction of sustainable agriculture. *Society & Natural Resources* 10 (3):283–95. doi:10.1080/08941929709381027.
- Rosset, P. M., and M. A. Altieri. 2017. *Agroecology: Science and politics*. Rugby: Practical Action Publishing.
- Sabourin, E., M. M. Patrouilleau, J. Francois, L. Vásquez, and P. Niederle, ed. 2017. *Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe Red PPAL*. Brasilia: FAO.
- Sauer, S., and G. Mészáros. 2017. The political economy of land struggle in Brazil under workers' party governments. *Journal of Agrarian Change* 17 (2):397–414. doi:10.1111/joac.12206.
- Schmitt, C., P. Niederle, M. Ávila, E. Sabourin, P. Petersen, L. Silveira, W. Assis, J. Palm, and G. B. G. Fernandes. 2017. La experiencia brasileña de construcción de políticas públicas en favor de la Agroecología. In *Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y El Caribe*, ed. FAO, Red PP-AL, 44–69. Brasilia: FAO.
- Scoones, I., M. Edelman, S. M. Borrás Jr., R. Hall, W. Wolford, and B. White. 2018. Emancipatory rural politics: Confronting authoritarian populism. *The Journal of Peasant Studies* 45 (1):1–20. doi:10.1080/03066150.2017.1339693.
- Sharp, G. 1994. *From dictatorship to democracy*. Boston: Albert Einstein Institute.
- Spinoza, B. 2001. *Ethics*. Hertford, UK: Wordsworth Editions.
- Stédile, J. P. 2017. Necesitamos una nueva estrategia de disputa del poder político. ALAI América en Movimiento. Accessed on October 15 2018. <https://www.alainet.org/es/articulo/188764>
- Steger, M. B. 2006. *The quest for evolutionary socialism: Eduard bernstein and social democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Timmermann, C., and G. Félix. 2015. Agroecology as a vehicle for contributive justice. *Agriculture and Human Values* 32 (3):523–38. doi:10.1007/s10460-014-9581-8.
- Vandermeer, J., A. Aga, J. Allgeier, C. Badgley, R. Baucom, J. Blesh, L. Shapiro, A. Jones, L. Hoey, M. Jain, et al. 2018. Feeding prometheus: An interdisciplinary approach for solving the global food crisis. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 2:39. doi:10.3389/fsufs.2018.00039.
- Vázquez, L. L., J. Marzin, and N. González. 2017. Políticas públicas y transición hacia la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas en Cuba. In *Políticas públicas a favor de la agroecología en América*

- Latina y El Caribe, ed.FAO, Red PP-AL, 108–31. Brasilia: FAO.
- Veltmeyer, H. 2018. Resistance, class struggle and social movements in Latin America: Contemporary dynamics. *The Journal of Peasant Studies* 1–22. doi:10.1080/03066150.2018.1493458.
- Vergara-Camus, L., and C. Kay. 2017. Agribusiness, peasants, left-wing governments, and the state in Latin America: An overview and theoretical reflections. *Journal of Agrarian Change* 17 (2):239–57. doi:10.1111/joac.12215.
- Waddell, B. May 1st 2018. Laying the groundwork for insurrection: A closer look at the U.S. role in Nicaragua’s social unrest. *Global Americans*, Accessed October 15, 2018. <https://theglobalamericans.org/2018/05/laying-groundwork-insurrection-closer-look-u-s-role-nicaraguas-social-unrest/>
- Webber, J. R. 2017. Evo Morales, transformismo, and the consolidation of agrarian capitalism in Bolivia. *Journal of Agrarian Change* 17 (2):330–47. doi:10.1111/joac.12209.
- Wezel, A., S. Bellon, T. Doré, C. Francis, D. Vallod, and C. David. 2009. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. *Agronomy for Sustainable Development* 29 (4):503–15. doi:10.1051/agro/2009004.
- Wilpert, G. 2007. *Changing Venezuela by taking power: The history and policies of the chavez government*. London: Verso.
- World Wide Fund for Nature (WWF). 2014. *The growth of soy: Impacts and solutions*. Surrey, UK: Gland.
- Wright, J. 2005. *Falta Petroleo! Perspectives on the emergence of a more ecological farming and food system in post-crisis Cuba*. Thesis, Wageningen University, Wageningen, The Netherl